

Las coaliciones transformadoras y los dilemas del desarrollo inclusivo en las zonas rurales de América Latina

**M. Ignacia Fernández, Raúl Hernández Asencio,
Carolina Trivelli y Alexander Schejtman**

Documento de Trabajo N° 107
Programa Dinámicas Territoriales Rurales
Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural



Este documento es el resultado del Programa Dinámicas Territoriales Rurales, que Rimisp lleva a cabo en varios países de América Latina en colaboración con numerosos socios. El programa cuenta con el auspicio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá). Se autoriza la reproducción parcial o total y la difusión del documento sin fines de lucro y sujeta a que se cite la fuente.

This document is the result of the Rural Territorial Dynamics Program, implemented by Rimisp in several Latin American countries in collaboration with numerous partners. The program has been supported by the International Development Research Center (IDRC, Canada). We authorize the non-for-profit partial or full reproduction and dissemination of this document, subject to the source being properly acknowledged.

Cita / Citation:

Fernández, I., Hernández, R., Trivelli, C. y Schejtman, A. 2012. “Las coaliciones transformadoras y los dilemas del desarrollo inclusivo en las zonas rurales de América Latina”. Documento de Trabajo N° 107. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile.

© Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Programa Dinámicas Territoriales Rurales
Casilla 228-22
Santiago, Chile
Tel +(56-2) 236 45 57
dtr@rimisp.org
www.rimisp.org/dtr

Índice

1.- Introducción	1
2.- Coaliciones y desarrollo territorial.....	3
2.1. Coalición como concepto operativo	5
2.2 La coalición territorial transformadora como “tipo ideal”	6
3.- Principales hallazgos: Tres tipos de coaliciones territoriales	8
3.1. Coaliciones con objetivos de crecimiento.....	8
3.2. Coaliciones con objetivos de inclusión social	11
3.3. Coaliciones que combinan crecimiento e inclusión.....	15
4.- Conclusiones.....	20
Bibliografía	26

1.- Introducción

El análisis de los mapas de dinámicas territoriales elaborados durante la primera etapa del programa Dinámicas Territoriales Rurales muestra que el 14% de los territorios latinoamericanos registra de manera simultánea incrementos de ingresos, reducción de pobreza y mejora de los indicadores duros de equidad (Berdegué, et al, 2011). Estos datos tienen una doble lectura. Por un lado, muestran que el crecimiento inclusivo, con reducción de pobreza y mejoras en los indicadores de equidad, es posible y que, por lo tanto, no basta conformarse con el crecimiento a secas como objetivo de las políticas públicas de desarrollo. Por otro lado, los datos evidencian que este objetivo es muy difícil de lograr y que está lejos de ser la norma en las zonas rurales del continente.

El escaso número de territorios “exitosos” es una prueba de la dificultad para generar procesos virtuosos de desarrollo inclusivo en el mundo rural latinoamericano. Buorgignon et al. (2007) señalan que esta resistencia al cambio es atribuible a la existencia de “trampas de desigualdad”, resultado de mecanismos e instituciones económicas, políticas y socio-culturales que preservan dinámicas de exclusión en el ámbito territorial. El resultado sería la persistencia de situaciones inequitativas en todas las dimensiones de desigualdad (riqueza, poder, status social), que interactuarían para evitar cambios radicales. La evolución de estos entramados institucionales estaría determinada por estructuras de larga data, cuya persistencia solo sería alterada por acontecimientos más o menos radicales de origen interno o externo a los territorios, o por adaptaciones graduales a cambios en los contextos nacional o internacional.

Estas consideraciones son el punto de partida de nuestro estudio. La relativa excepcionalidad de los casos de desarrollo inclusivo nos obliga a mirar con mayor detalle los territorios donde estas transformaciones han tenido lugar, ya sea por un choque que propicia cambios en periodos cortos o por cambios graduales. ¿Por qué estas transformaciones se producen en algunos territorios y en otros no? ¿Qué elementos hacen posible que en algunos territorios de América Latina se generen círculos virtuosos de crecimiento y reducción de la desigualdad mientras en la mayoría de los casos solo hay cambios parciales? Para responder a estas cuestiones, la hipótesis de partida del Programa Dinámicas Territoriales Rurales señala que el desarrollo territorial inclusivo es el resultado de las relaciones circulares entre instituciones, actores y activos (Rimisp, 2008). La clave estaría en el tipo de interacciones que generan los actores y en su capacidad para propiciar cambios en las normas que regulan la dotación de activos y su distribución dentro de los territorios (North, 2006; Acemoglu y Robinson, 2006; Evans, 1995). Este enfoque supone asumir una perspectiva dinámica del cambio institucional, que es visto como el resultado de pugnas competitivas, que obligan a los actores a implementar estrategias de interacción para lograr sus propósitos. Una de estas estrategias son las denominadas “coalicio-



nes sociales”, que el programa DTR considera clave para entender los procesos de cambio en las zonas rurales (Berdegué et al, 2012).

Las coaliciones sociales serían uno de los elementos centrales en los procesos de cambio y una de las claves de los procesos de desarrollo territorial inclusivo. Partiendo de este enfoque, el objetivo de este documento es analizar, dentro de las coaliciones sociales, aquellas que propician cambios en las dinámicas territoriales y apuntan a procesos de desarrollo territorial rural inclusivos. Nuestro trabajo apunta a comprender qué coaliciones, con qué características y bajo qué condiciones, logran cambios institucionales que favorecen procesos inclusivos en contextos de crecimiento económico. El documento se inicia con una discusión teórica sobre la caracterización y el aporte de las coaliciones en los procesos de desarrollo territorial rural. Surge aquí la categoría de “coaliciones territoriales transformadoras”, entendidas como un constructo teórico ideal, que posteriormente es contrastado a partir del análisis de seis estudios de caso realizados en el marco del proyecto “Coaliciones y desarrollo territorial” del programa Dinámicas Territoriales Rurales. Estos seis casos se clasifican en tres grupos de coaliciones: las coaliciones que buscan objetivos de crecimiento, las coaliciones que buscan objetivos de equidad y las coaliciones que buscan compatibilizar ambos tipos de objetivos. El documento concluye con algunas reflexiones finales, que avanzan algunos análisis e hipótesis, que esperamos contribuyan a arrojar luz sobre estos puntos y permitan trabajos posteriores con mayor profundidad y especificidad sobre el papel de las coaliciones en el desarrollo de las zonas rurales de América Latina¹.

¹ Este artículo se basa en el trabajo colaborativo realizado durante varios años en el marco del programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Este programa incluyó una primera etapa de mapas de dinámicas territoriales en 11 países. Posteriormente se realizaron estudios de caso en 18 territorios del continente, incluyendo metodologías cuantitativas y cualitativas. Finalmente se realizaron 5 estudios temáticos sobre los principales factores explicativos de las dinámicas de desarrollo relevadas por los estudios territoriales. Este es uno de esos estudios y trata sobre la problemática de coaliciones en 6 de estos territorios. En cada caso se realizó trabajo de campo y entrevistas con todo tipo de actores, tanto integrantes de la coalición como actores externos a la misma. Los estudios de caso estuvieron a cargo de Daniela Miranda, Francisca Meynard e Ignacia Fernández (Chiloé y Jiquiriçá) y Raúl Hernández Asensio (Cerrón Grande, Ostua-Guija y Valle Sur-Ocongate). También se realizó un estudio teórico a cargo de Martín Tanaka del Instituto de Estudios Peruanos. Agradecemos la colaboración de Ilana Nussbaum en el trabajo de campo y Eduardo Ramírez que nos facilitó material de investigaciones anteriores sobre el caso de Chiloé; Julian Quan por poner a disposición los resultados de las investigaciones desarrolladas por él y su equipo y al Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBAIANO), especialmente a la profesora de Geografía Aline dos Santos Lima por facilitar la coordinación y logística del trabajo de campo en Jiquiriçá. En el caso de Cerrón Grande agradecemos al equipo de PRSIMA y especialmente a Ileana Gómez y Elías Escobar. En el caso de Ostua -Guija, agradecemos el equipo del IDIES de la Universidad Rafael Landívar y especialmente a Wilson Romero, Victoria Peláez y Erick Morataya. Finalmente, en el caso de Valle Sur-Ocongate fue muy importante el apoyo prestado por las instituciones que participaron en el estudio: Centro Guamán Poma de Ayala, Asociación Jesús Obrero-CCAIJO, Centro Bartolomé de las Casas, Municipalidad Provincial de Quispicanchi, Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de América Latina y Programa Corredor Puno-Cuzco de Agrorural. También debemos agradecer a los lectores de los estudios de caso, Adolfo Garcé, Alvaro Mejía, Gonzalo de la Maza, Claudia Serrano, Ludwig Huber y Martin Scurrah, así como a Manuel Chiriboga quien participó en las reuniones iniciales del grupo de trabajo. Por último quisiéramos agradecer a todos quienes nos entregaron parte de su tiempo participando de las entrevistas que nutrieron el trabajo de campo.



2.- Coaliciones y desarrollo territorial

Al analizar los procesos de cambio en el mundo rural, Bebbington (2011) señala que en todas las sociedades, tanto el cambio como el mantenimiento del status quo, requieren de acciones coordinadas. En el caso de los territorios rurales de América Latina señala que: “nuestro interés en la emergencia de territorios *www-w* nos obliga a centrarnos en las formas coordinadas de acción colectiva que impulsan a los territorios a salirse de las sendas predeterminadas”. Desde esta perspectiva, las coaliciones serían uno de los posibles mecanismos que permitiría a los territorios escapar del peso de las estructuras (económicas, sociales, culturales) que condicionan los caminos de desarrollo e impiden o dificultan el logro de los objetivos de crecimiento con reducción de pobreza e inequidad (en adelante *www*). Las coaliciones permitirían impulsar sendas de cambio, aprovechando los intersticios abiertos en las estructuras que condicionan el marco de posibilidades de las sociedades rurales. Estos intersticios podrían venir dados por eventos radicales (como una reforma agraria, el descubrimiento de una nueva tecnología que permite aprovechar un recurso natural hasta entonces poco significativo o un cambio global en la orientación de las políticas a nivel nacional) o ser el resultado de procesos acumulativos de medio o larga duración. Mahoney y Thelen (cit. en Bebbington et al, 2012) proponen, en este sentido, 4 posibilidades de cambio institucional no paradigmático: (i) cambio por desplazamiento, mediante la eliminación de viejas reglas y la introducción de nuevas; (ii) cambio por superposición de capas mediante la introducción de nuevas reglas junto a las existentes; (iii) cambio por deriva, debido al impacto distinto de las reglas tradicionales como resultados de un cambio en el entorno; y (iv) cambio por conversión, debido a una reorganización estratégica de las normas y su peso relativo en el conjunto del marco institucional. Estas 4 posibilidades, como veremos más adelante, pueden ser aprovechadas por las coaliciones para generar cambios institucionales favorables a procesos de desarrollo territorial inclusivos.

¿Por qué las coaliciones? Bebbington señala que, además de las coaliciones, existen otras modalidades de acción colectiva que podría contribuir a generar cambios en las áreas rurales. Es el caso de los movimientos sociales y de las *policy networks*. Sin embargo, dada la naturaleza de las “trampas” que afectan a los territorios (dotación extremadamente desigual de activos, incluyendo el poder político; dependencia respecto a dinámicas regionales y nacionales sobre las que no se tiene ningún control, intereses creados que facilitan la perpetuación de normas e instituciones desfavorables para el desarrollo rural inclusivo, etc.), una de la tesis centrales derivadas del trabajo de programa Dinámicas Territoriales Rurales es que, dentro de las alternativas mencionadas, las coaliciones son los mecanismos de acción colectiva que tienen una mayor capacidad potencial para direccionar los procesos de cambio en la dirección *www* (Berdegué et al, 2011). Por un lado, estas coaliciones permitirían, bajo ciertas condiciones, que los intereses de los sectores menos favorecidos de la sociedad rural sean también considerados en los procesos



de toma de decisiones. Por otro lado, permitirían tender los puentes entre las diferentes escalas de las dinámicas económicas, sociales y políticas (local, regional, nacional, internacional) que determinan los procesos de desarrollo en el mundo rural. Son estas dos características las que explican su particular importancia en los procesos de cambios institucional que buscan generar desarrollo inclusivo en las zonas rurales, aunque como veremos más adelante, al analizar casos concretos, se trata de una tarea que no está exenta de problemas y riesgos.

Para Bebbington, el estudio del surgimiento de las coaliciones debe apuntar tanto a los incentivos que existen para que dichas coaliciones se conformen, como al campo de las ideas que las sustentan y dan forma. Ambos factores se relacionan entre sí, ya que los incentivos son percibidos a partir de las ideas preexistentes sobre justicia, derecho, costo, beneficio, etc. Las ideas no deben ser consideradas un epifenómeno de los procesos de cambios, sino una parte intrínseca de los mismos. El proceso por el cual estas ideas van tomando fuerza, se legitiman y comienzan a disputar el espacio público, debe ser visto como una parte de la transformación, imprescindible al analizar las transformaciones de medio y largo plazo, con impacto profundo en los territorios, más allá de coyunturas concretas. Esto implica que el análisis debe centrarse tanto en los actores que integran las coaliciones (sus características, objetivos, incentivos y estrategias de acción), como en los discursos que articulan. Para comprender los procesos de desarrollo territorial rural es importante atender cómo la apuesta por el cambio se legitima entre sus promotores y cómo posteriormente es asumida por otros actores dentro de cada territorio. De ahí la importancia de analizar cómo los integrantes de la coalición llegan a un concepto compartido de lo que es un cambio deseable y cómo las “visiones locales del desarrollo” se negocian con los discursos sobre el desarrollo que existen a nivel nacional e internacional.



2.1. Coalición como concepto operativo

A partir de las consideraciones anteriores, definimos coalición territorial como un conjunto de diferentes actores que realizan acciones convergentes en torno a una dinámica territorial de desarrollo (Tanaka, 2012). Esta definición permite diferenciar a las coaliciones de otras formas de acción colectiva como los grupos de interés (con intereses más específicos) o los movimientos sociales (con menor diversidad de actores). En concreto, desde un punto de vista analítico, existen 5 elementos necesarios para distinguir una coalición de otras formas de acción colectiva: (i) diversidad de actores, (ii) objetivos comunes, (iii) permanencia en el tiempo, (iv) disponibilidad de recursos diversificados y (v) capacidad de acción articulada.

El primer elemento a considerar es la diversidad de actores. Las coaliciones deben ser vistas desde una óptica realista, como respuestas a una necesidad. Tanaka (2012) señala que “se dan en tanto a un solo actor no le es posible conseguir por sí mismo el respaldo suficiente para lograr los objetivos que se propone, por lo que requiere del apoyo de otros actores”. Para sus integrantes, implican cálculos y riesgos, además de ventajas. Derivan de un cálculo racional de cada actor respecto a las posibilidades de llevar adelante sus objetivos y en su evolución son importantes, tanto el contexto de oportunidades en el que se desarrollan, como los incentivos que empujan a los actores hacia la cooperación. En este sentido, diversos autores señalan que los incentivos para la formación de coaliciones son más importantes cuando los actores que las integran perciben una amenaza cercada que pone en peligro sus intereses o su propia supervivencia como actores sociales autónomos. De ahí que no deba sorprender que las coaliciones sean más fáciles de percibir y de analizar en contextos de tensión social o política, cuando existen tensiones marcadas y proyectos de territorio diferentes.

El segundo elemento que caracteriza a una coalición es la existencia de objetivos convergentes entre sus integrantes. Esto no quiere decir que deba existir una total coincidencia entre los socios de la coalición. Tampoco supone que los integrantes de una coalición tengan que articular necesariamente un proyecto compartido (aunque cuando este proyecto existe puede convertirse en una ventaja importante). Aunque algunas coaliciones cuentan con objetivos formulados de manera explícita, a través de un programa o manifiesto; otras, por el contrario, son el resultado de una sinergia de intereses particulares, que no llega a cristalizar en un programa explícito. Esto supone que en algunos casos solo es posible detectar la existencia de coaliciones a partir de un trabajo analítico, ya que sobre el terreno los propios actores no son conscientes de su existencia o incluso pueden llegar a rechazarla de manera directa.

El tercer elemento es la existencia de un enfoque de medio y largo plazo. Para que una acción cooperativa pueda ser considerada una coalición deben ir más allá de la convergencia puntual de intereses a corto plazo. Los casos que analizaremos incluyen coalicio-



nes que pueden tener ciclos de vida de varias décadas, aunque su vida institucional atraviesa por diferentes etapas, con periodos de mayor o menor intensidad. Momentos en los que existe una gran cohesión entre sus integrantes, pueden seguirse de periodos en los que los lazos se diluyen, por falta de objetivos definidos o por el mismo hecho de haber logrado los propósitos iniciales de la coalición. En este sentido podemos hablar de coaliciones rígidas, que mantienen un mismo programa a lo largo de toda su trayectoria y coaliciones adaptativas, que en el curso de su existencia se recrean para adaptarse a las coyunturas, sin perder por ello el sentido de continuidad en sus acciones.

El cuarto elemento importante para la existencia de coaliciones es la disponibilidad de recursos diversificados. Las coaliciones son herramientas poderosas en la interacción social porque conjugan la fuerza y capacidad de actores diferentes. La variedad de recursos, capitales o activos de los actores que forman parte de una coalición inciden en el tipo de acción que cada coalición puede desarrollar en cada contexto. En el plano simbólico, las coaliciones suelen partir de un conjunto de creencias, ideas, normas y valores compartidos entre sus integrantes, que remiten a la situación que quieren mantener o modificar. En determinadas circunstancias esta comunidad de intereses y percepciones puede tomar la forma de un discurso muy articulado o incluso convertirse en una narrativa heroica, que genera cohesión entre sus integrantes e incrementa la legitimidad de la coalición ante otros actores.

Finalmente, las coaliciones se definen como tales en tanto tienen un marco de acción definido y apuntan a producir cambios en las dinámicas sociales. En este sentido, se diferencian de un sentido común compartido, de un habitus en el sentido bourdiano y de una coalición discursiva, en el sentido propuesto por Birner et al (2007).

2.2 La coalición territorial transformadora como “tipo ideal”

Estas 5 variables están presentes en todas las coaliciones. Sin embargo, no siempre se dan de igual manera. En concreto, en este estudio nos interesa analizar el tipo de coaliciones que impulsan cambios institucionales o transformaciones en las dinámicas territoriales de las zonas rurales de América Latina en un sentido favorable a los proyectos de desarrollo territorial inclusivo. Se trata de un tipo ideal de coalición que puede formularse como un constructo weberiano, es decir, como una abstracción de determinados elementos de la realidad, a partir del cual examinar las coaliciones “realmente existentes” y los tipos de dinámicas generadas por su acción. Este tipo ideal de coalición territorial transformadora tendría los siguientes atributos:

- Incluye a la mayoría de los agentes interesados en el logro de alguno de los objetivos del círculo virtuoso que, por la vía de la concertación se convierte en el objetivo central de la coalición.
- Sea en forma explícita o implícita, sus miembros comparten un/os objetivo/s común/es, que apuntan a cambios institucionales que generan círculos virtuosos



de crecimiento y equidad, aún cuando sus intereses particulares puedan ser distintos.

- Apunta a proyectos de largo plazo en un territorio. Una coalición de mediano o largo plazo tiende a reinventarse, a recrearse, para mantenerse como actor.
- Tiene poder para realizar su objetivo. Este poder se deriva en recursos tangibles e intangibles (diferentes combinaciones de capital económico, social, cultural y político) que al ser puestos en juego resultan suficientes para conseguir dicho resultado.
- Cuenta con capacidad para generar y difundir un discurso sobre el territorio que es considerado como legítimo por otros actores que lo van asumiendo progresivamente.

A partir de este tipo ideal es posible discutir las particularidades de las experiencias de acción colectiva que condujeron a los resultados encontrados por el Programa. El desafío es analizar si las coaliciones transformadoras territoriales, tal como las hemos definido, existen sobre el terreno, o cuán cerca están algunas coaliciones realmente existentes de este modelo ideal. Los ejemplos seleccionados son un reflejo de la diversidad de coaliciones que existen en el mundo rural latinoamericano. Su estudio nos permitirá encarar los dilemas que confrontan en la práctica las coaliciones de actores involucradas en procesos de desarrollo: la disyuntiva entre eficiencia y cohesión, los mecanismos de toma de decisiones al interior de la coalición, las relaciones con otros actores que tienen sus propios intereses en los territorios donde las experiencias se desarrollan, etc.

El eje de la clasificación de las coaliciones que presentamos es la manera en que las coaliciones negocian los dilemas entre crecimiento e inclusión social. Las coaliciones pueden impulsar procesos de crecimiento o bien concentrarse en mejorar la inclusión social y/o la capacidad de agencia de los actores territoriales. Pero los casos en que estos objetivos se consiguen al mismo tiempo son muy limitados. En este sentido podemos encontrar 3 tipos de coaliciones: (i) coaliciones que apuestan por el crecimiento económico como objetivo principal, (ii) coaliciones que apuestan por la equidad y la inclusión como objetivo principal, (iii) coaliciones que impulsan dinámicas que conjugan ambos objetivos. El análisis se centra en 6 casos concretos, 2 por cada 1 de los tipos de coaliciones señalados. Como veremos, cada coalición es un caso particular, con dilemas y problemas específicos, que hacen más complejo el análisis del papel de las coaliciones en los procesos de desarrollo territorial rural².

² Los casos se analizan con más detalle en los estudios de caso respectivos. En las siguientes páginas solo se presenta un resumen de los hechos más relevantes para la discusión.



3.- Principales hallazgos: Tres tipos de coaliciones territoriales

3.1. Coaliciones con objetivos de crecimiento

El primer grupo de coaliciones analizadas incide fundamentalmente sobre el crecimiento económico de los territorios. Estas coaliciones son el ejemplo más evidente del impacto que pueden tener las coaliciones en las dinámicas territoriales. Sus acciones transforman la orientación económica y repercuten de manera profunda en las relaciones sociales y en el equilibrio político. Algunas de sus características son: gran capacidad para movilizar recursos (sobre todo económicos, pero también políticos), presencia de un actor dominante, que permite procesos deliberativos sencillos y hace posible aprovechar las coyunturas económicas favorables para los territorios, capacidad para negociar con el poder político, para impulsar o tolerar los cambios institucionales clave y un discurso que enfatiza el crecimiento económico como principal argumento legitimador.

En América Latina este tipo de coaliciones es frecuente en contextos de crecimiento de las actividades extractivas, pero pueden darse en torno a otras actividades económicas como el gran turismo o la agroindustria. Un ejemplo lo encontramos en la coalición que impulsa la crianza y exportación de salmón en el borde costero de parte de la zona austral de Chile (Fernández y Miranda, 2011). El proceso se inicia a mediados de los años ochenta. Sus protagonistas son un conjunto de empresarios nacionales y extranjeros y determinados sectores del Estado chileno. El objetivo es aprovechar el capital natural del territorio para potenciar una industria salmonera, capaz de competir en el mercado internacional. Para lograrlo se impulsan cambios en las políticas e instituciones que regulan el acceso y la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente. En pocos años los resultados son inmediatos y Chiloé se convierte en un referente mundial en la producción de salmón. Esto supone que importantes sectores de la población rural comienzan a trabajar en la industria y transforman sus estrategias de vida de manera radical. Entre 1992 y 2003 los ingresos de los hogares experimentan un incremento mayor a la media nacional, siendo su nivel final relativamente alto. También la pobreza cae más rápidamente que el promedio nacional. Aunque el índice Gini empeora, se reduce de la brecha de género por encima del promedio nacional (Ramírez et al, 2009). Se puede hablar, en este sentido, de un crecimiento económico con elementos importantes de inclusión social, aunque la historia no está exenta de problemas.

El desarrollo de la industria salmonera tiene lugar en un contexto de reformas neoliberales, que limita la capacidad de control tanto del estado como de los actores territoriales respecto a la intervención de las empresas promotoras. Este contexto institucional macro es un factor que determina el impacto diferenciado del desarrollo de las industrias salmoneras en el sur de Chile, respecto a otras experiencias en otros países (Phyne, 2010). Durante los años noventa existe escasa regulación y la coalición establece una relación con el territorio de carácter instrumental. Desde el principio existen sectores que se oponen al cambio de orientación productiva. Grupos conservacionistas y ecologistas ven el crecimiento de la industria salmonera como un riesgo para el modo de vida tradicional de



la población. La identidad cultural del territorio es vista como un bien en riesgo como producto de estos cambios. También se reprocha a la industria salmonera su escasa capacidad de diálogo con los actores locales.

La legitimidad de la coalición salmonera se vincula casi exclusivamente con su capacidad para generar empleos entre la población local. La crisis se precipita a partir de 2008 cuando la extensión de un virus afecta a las poblaciones de salmón y provoca la muerte de la mayor parte de los animales. La industria salmonera chilota se sume en un profundo declive que se resuelve progresivamente en materia de producción, aunque hasta la actualidad el empleo sigue sin recuperarse a los niveles anteriores a la crisis. Muchas empresas se ven obligadas a cerrar o reducir su requerimiento de personal. Es entonces cuando se pone de manifiesto la falta de arraigo de la coalición salmonera. Los actores de la coalición encuentran problemas para generar nuevas alianzas que permitan reconducir la industria. La mayor parte de los actores locales observa la situación sin llegar a involucrarse directamente en la búsqueda de soluciones. La crisis también es aprovechada por los grupos contrarios a la industria salmonera para ganar nuevos espacios de negociación a nivel local y regional (Fløysand, Haarstad y Barton, 2010).

La crisis del virus ISA pone en cuestión el papel territorial de la coalición salmonera. Permite mayor visibilidad de otros actores, como los sindicatos salmoneros que comienzan un proceso de integración a nivel regional y nacional (Oseland, Haarstad y Fløysand, 2012). Sin embargo, también evidencia la importancia de las transformaciones producidas en la economía de la isla. El papel central del empleo asalariado dentro de las estrategias de vida familiar hace que el regreso a la situación anterior al auge de la industria salmonera sea muy difícil. Los propios pobladores del territorio están interesados en la permanencia de las empresas salmoneras, a pesar de tener en muchas ocasiones un discurso crítico respecto a sus prácticas ambientales y laborales. Como respuesta, la industria salmonera, presionada por la población local y por una mayor sensibilidad dentro del estado chileno ante los riesgos ambientales, comienza a desarrollar prácticas productivas menos agresivas con el medio ambiente. La situación de desconfianza se mantiene, pero en la etapa actual de recuperación posterior a la crisis la mayor parte de los actores asume la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan el equilibrio entre la industria salmonera y otros intereses de la población chilota adicionales al empleo.

Chiloé es un ejemplo de cómo una coalición enfocada en un aspecto productivo concreto puede impulsar una transformación radical de un territorio, en un periodo de tiempo relativamente breve. Esta transformación productiva tiene un impacto profundo en la generación de ingresos por parte la población. Un aspecto significativo es la capacidad de la coalición para enfrentar el colapso de la estrategia inicial de producción de salmón en granjas con alta densidad. Sin dejar de lado sus prioridades (fomentar la industria salmonera), la coalición asume la necesidad de negociar aspectos concretos con otros actores. Este giro se debe a la existencia dentro del territorio de actores estatales fuertes,



que asumen un papel mediador y regulador, sobre todo en temas ambientales. También es importante la existencia de una coalición alternativa, compuesta por ambientalistas y ONG locales, con buenas redes de contactos dentro del Estado y de la cooperación internacional, que elaboran un discurso alternativo sobre el desarrollo local. Sus demandas evidencian los dilemas entre crecimiento, equidad y sostenibilidad, y obligan a la coalición salmonea a poner en agenda los temas ambientales y culturales. Cuando estos contrapesos no existen, la situación puede ser mucho más complicada. Un ejemplo lo encontramos en el suroriente de Guatemala, en el territorio denominado Ostúa-Guija.

La coalición de Ostúa-Guija es un caso paradigmático de "coalición de poderosos" (Asensio, 2011a). El ámbito de acción son 4 municipios de la cuenca del río Ostúa: Asunción Mita, Santa Catarina Mita, El Progreso y Monjas. La coalición se conforma a finales de los noventa, cuando los acuerdos de libre comercio abren un periodo de cambio en la economía de las zonas rurales del oriente de Guatemala. Ostúa-Guija deja de ser una zona de economía relativamente diversificada para convertirse en un territorio casi exclusivamente agrícola. El resultado es el predominio de una coalición de poderosos, integrada por tres tipos de actores: (i) agricultores medianos y grandes orientados a la exportación; (ii) profesionales que proveen servicios agrícolas (ferreteros, empresas de agro servicios y cooperativas); y (iii) comerciantes que enlazan a los productores locales con los mercados mayoristas de Ciudad de Guatemala y San Salvador. Esta coalición logra aprovechar la coyuntura de cambio para establecer un conjunto de arreglos institucionales favorables a sus intereses, que desde ese momento condicionan las actividades productivas y controlan la vida social y económica del territorio. El eje de su proyecto es un mercado muy dinámico de tierras, que incluye compra y alquiler de propiedades rurales. La coalición se apoya en la renuncia del Estado a intervenir en la comercialización de los productos agrícolas y en la existencia de un mercado fluido de mano de obra urbana y rural.

Estos arreglos permiten a la elite controlar decisiones clave para la dinámica del territorio. En un periodo muy corto, la producción agrícola se especializa en productos hortícolas, con gran dinamismo comercial, lo que permite reducir la pobreza de manera significativa. El flujo económico del territorio se incrementa y también mejoran los servicios básicos. Entre 2000 y 2006 el territorio experimenta una evolución positiva en los ingresos por familia, incidencia de pobreza y distribución de los ingresos, medida según el índice de Gini (Romero y Zapil, 2009). Sin embargo, este éxito está acompañado de una pérdida de autonomía por parte de los pequeños productores rurales. Debido a las nuevas condiciones de arrendamiento de tierras, dependen cada vez más del trabajo asalariado y ven restringidas sus posibilidades de desarrollar estrategias de vida alternativas. Su capacidad de negociación está muy limitada. La elite controla los resortes del poder político local y monopoliza las principales cadenas de distribución de insumos agrícolas y comercialización. Los proyectos que desafían esta lógica se encuentran con el bloqueo o la oposición abierta de autoridades y grupos de poder, lo que los conduce al fracaso.



Contra un sentido común muchas veces asumido de manera acrítica, la coalición de Ostúa-Güija muestra que las coaliciones endógenas (dominadas por actores locales) no necesariamente propician un tipo de desarrollo inclusivo para todos los habitantes de un territorio. La coalición funciona porque sus integrantes cuentan con importantes recursos en términos económicos y políticos, en un contexto en el que no existen contrapesos dentro del territorio. El tejido social es frágil y fragmentado. A diferencia de Chiloé, el Estado no tiene un papel amortiguador. Ni las municipalidades ni el gobierno central juegan un papel importante en la dinámica territorial. La capacidad de fiscalización de las actividades de la coalición es mínima y se privilegian las alianzas personales entre miembros de la elite local y la elite nacional, por encima de las políticas públicas y del cumplimiento de la normativa vigente. Los cambios de finales de los noventa suponen la desaparición de los sindicatos agrarios. La ausencia de ONG y de la cooperación internacional impide que los actores locales menos favorecidos puedan afrontar los costos de las nuevas formas de acción colectiva. Tampoco se produce la transferencia de capital simbólico y social entre ONG de dentro y fuera del territorio que encontramos en otros casos analizados en este documento.

En resumen, Chiloé y Ostúa-Güija son ejemplos de coaliciones que impulsan cambios profundos en las dinámicas territoriales en periodos de tiempo cortos. Los resultados son contradictorios desde el punto de vista de las condiciones de vida de la población involucrada. Existe un fuerte crecimiento y una mejora de los ingresos promedio, pero también una sensación muy acusada de pérdida por parte de los habitantes del territorio. La transformación productiva implica cambios en las costumbres, en los valores y en las estrategias de vida de la población local. Incluso puede suponer un cambio de categoría social, como ocurre con los campesinos chilotes, que primero pasan a ser trabajadores asalariados de la industria salmonera y posteriormente, cuando la crisis obliga a reducir personal, se convierten en "pobres". Estos elementos son centrales en los planteamientos de las coaliciones que analizamos a continuación.

3.2. Coaliciones con objetivos de inclusión social

Un segundo grupo de coaliciones se centra en fortalecer la capacidad de la población local para participar en los procesos de toma de decisiones y asignación de recursos. En este sentido se las puede denominar "coaliciones pro-inclusión", en tanto este es su principal aporte. Se trata por lo general de coaliciones amplias, que incluyen actores públicos y privados, así como a ONG e instituciones de la sociedad civil. Los resultados en cuanto a crecimiento y reducción de la pobreza son muchas veces limitados. Un factor a tener en cuenta es que los procesos deliberativos son más complejos. También es frecuente que estas coaliciones se apoyen y/o desarrollen un discurso legitimador muy fuerte, que apele a valores sociales o a otros referentes de gran impacto público (medio ambiente, género etc.). Sin embargo, al mismo tiempo puede levantar suspicacias en otros sectores



de la sociedad, que se consideran amenazados por estos discursos o por la imagen militante y activista de la coalición.

Un ejemplo de este tipo de coalición lo encontramos en la ribera norte del embalse Cerrón Grande, en El Salvador (Asensio, 2011b). En este caso estamos ante una coalición explícita y de larga duración. El escenario es un territorio de 411 km² compuesto por los distritos de Tejutla, El Paraíso, Santa Rita, Chalatenango, Azacualpa, San Luis del Carmen, San Rafael y San Francisco Lempa, en el departamento de Chalatenango. Se trata de una coalición muy dúctil, integrada por un gran número de actores, aunque la intensidad de su presencia no es siempre igual, ya que depende de sus propios ritmos de actividad y de los intereses específicos asociados a cada coyuntura. El factor aglutinante es un "proyecto", es decir, un conjunto de expectativas compartidas respecto a la manera en que deben organizarse las relaciones sociales y económicas en el territorio. Los objetivos concretos varían con el tiempo, pero existe un hilo conductor que atraviesa los momentos de auge y repliegue. Esta trayectoria se refleja en una narrativa consciente, elaborada por los propios integrantes de la coalición, muy sólida y asentada, que da cuenta de su historia como colectivo, desde los acuerdos de paz de Chapultepec en 1992 hasta nuestros días.

En una mirada de largo plazo, esta coalición está integrada por tres tipos de actores. En primer lugar encontramos ONG locales surgidas en el proceso de reconstrucción posterior a los acuerdos de Chapultepec. El segundo grupo está conformado por lo que podríamos denominar actores externos arraigados en el territorio. Se trata de organizaciones públicas y privadas, que si bien no tienen su sede en Chalatenango están vinculadas con el territorio por periodos de tiempo largos. El tercer grupo de actores involucrados en la coalición son organizaciones sociales de base, que existen en gran número en Chalatenango como resultado de la intensa acción de la cooperación internacional y de la propia trayectoria local de activismo social. Este grupo incluye cooperativas agrícolas y ganaderas, cooperativas de pescadores, asociaciones de productores, comités de manejo de cuenca. La participación de estos actores en la coalición es desigual. Depende de su propia fortaleza y de los intereses concretos de cada momento. Por lo general suelen involucrarse cuando existe una amenaza que les afecta directamente o cuando un proyecto incentiva su participación. En otros casos la clave es el empuje de tal o cual personaje local, que asume la representación institucional y se incorpora a las instancias de trabajo de la coalición.

En las actividades de la coalición que se inician a partir de 1992 existen etapas de mayor actividad y etapas de crisis, en las que la coalición tiene escasa capacidad para incidir en los procesos de toma de decisiones que afectan al territorio. Un aspecto significativo es la existencia de espacios institucionales creados por la propia coalición para dar continuidad a su labor, especialmente el Comité Ambiental de Chalatenango (CACH) y más recientemente el Comité Interinstitucional del Humedal Cerrón Grande (CIHCG). Estas instancias pueden ser consideradas parte de una misma coalición ya que, si bien tienen ámbitos de acción distintos, comparten muchos de sus objetivos y componentes.



El caso de Cerrón Grande muestra que es difícil analizar el balance de las coaliciones territoriales en términos de éxito o fracaso. La coalición es exitosa en muchos sentidos. Su activismo la convierte en un referente dentro y fuera del territorio. Es parte importante en los procesos de deliberación que afectan al departamento, sobre todo en lo que se refiere a políticas que afectan a los recursos naturales. Sus propuestas son escuchadas con atención, y tenidas en cuenta por las autoridades públicas y por los actores privados que intervienen en el territorio. Esta influencia, sin embargo, se da en un contexto en el que también existen otros actores en juego, que pugnan por defender sus propios intereses, que no siempre coinciden con los de la coalición. Chalatenango sigue siendo un departamento muy desarticulado. Los problemas ambientales son muy fuertes y aún se respira un ambiente general de precariedad. Las tensiones entre campesinos con tierras y campesinos sin tierra son continuas. En determinados sectores sociales existe incluso un cierto aire de decepción por el hecho de que la paz y la reconstrucción “no supusieron el cambio que pensábamos que iban a ser” (Silber, 2004, 2010).

Otro punto importante evidenciado por la coalición de Cerrón Grande es la importancia de los aliados externos al territorio, que permiten desarrollar acciones a diferentes escalas: a nivel local, nacional e incluso internacional. En cada uno de estos niveles existe una trama de aliados, que puede ser movilizada en las coyunturas críticas, para ejercer presión e influir en la toma de decisiones, dentro y fuera del territorio. La coalición ha sido capaz de apropiarse de sentidos comunes muy prestigiados en el mundo contemporáneo (preservación medio ambiental, sobre todo). La evolución del lenguaje reivindicativo, que pasa de una retórica revolucionaria en los noventa a una retórica ambientalista, permite ganar legitimidad y abrir el elenco de potenciales sociales, tanto dentro de El Salvador como fuera del país.

Esta red de alianzas es un activo fundamental de la coalición. Permiten incrementar el capital simbólico (al dar legitimidad a las demandas) y el capital social (al actuar como puente hacia nuevas redes de contactos de alcance nacional e internacional). Son importantes también para generar un sentido de proyecto compartido entre los integrantes de la coalición. Permiten dar forma a una “comunidad epistémica” en la que los participantes pueden no estar siempre de acuerdo, pero comparten un conjunto de valores y un análisis sobre el territorio y sobre sus dinámicas de desarrollo (Bebbington, 2011).

Una situación similar la encontramos en el Valle de Jiquiriçá, en el estado de Bahía, en Brasil. En este caso la coalición está integrada por un conjunto de sindicatos agrarios vinculados a los partidos de izquierda e instituciones del gobierno nacional, junto con ONG e instituciones de la Iglesia Católica que trabajan en el ámbito rural (Meynard, 2011).

Como en los casos anteriores, se trata de un territorio con una evolución positiva de los indicadores de crecimiento, reducción de pobreza y, en este caso también, reducción de



la desigualdad medida en términos económicos. Los motores de la dinámica de desarrollo del valle son una suma de transferencias y políticas progresistas, junto con mercados agrícolas diversificados, en los que la agricultura familiar logra insertarse (Quan, 2010; Quan, Olalde y Sousa, 2011). Un factor clave es la alianza conformada por los sindicatos de trabajadores rurales de 5 municipios del sector occidental del valle, compuesto por 20 municipios que en su conjunto forman el Territorio de Identidad del Valle de Jiquiriçá. Estos sindicatos se encuentran afiliados a la Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (FETRAF, SINTRAF a nivel municipal) y al Polo Sindical de Amargosa. Para lograr sus objetivos establecen alianzas con organismos públicos de nivel municipal y estatal, así como con ONG y otras instituciones públicas y privadas, como el Banco do Brasil y Petrobras. El origen de la FETRAF está ligado a la Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado da Bahia (FETAG-BA), presente en la actualidad en otros municipios del territorio. El quiebre se produce en 2004, principalmente por motivos ideológicos y políticos. Su base de activos es fundamentalmente social. Cuenta con un importante arraigo territorial, lo que le permite forjar las alianzas externas y adquirir capital político. Su incidencia en la dinámica de desarrollo del territorio se relaciona con su capacidad para organizarse y movilizar recursos en favor de la agricultura familiar y con la posibilidad de, a través de alianzas, focalizar en el territorio políticas nacionales o estatales favorables a la agricultura familiar. El foco está puesto en el fortalecimiento de la agricultura familiar y el acceso de los pequeños agricultores a beneficios sociales que ofrece el Estado. Entre las demandas tradicionales destacan los derechos para los trabajadores rurales, temas de salud, previsión social y jubilación. Más recientemente se incorporan también temas de índole productiva y de mercado, a través de la conformación de cooperativas de pequeños productores rurales. Un elemento clave al respecto es la creación en 2007 del colegiado, organismo de cooperación entre instituciones públicas y privadas, creado como parte de la implementación del programa Territorios de Identidad del gobierno brasileño. El colegiado, pese a sus limitaciones y las dificultades que registra en su interior, es significativo por ser un intento de crear una instancia de gobernanza territorial que permita negociar al interior del territorio los dilemas entre crecimiento e inclusión. La clave para ello es la presencia de todos los actores significativos del territorio, tanto los más poderosos como los que representan a los sectores desfavorecidos del interior rural bahiano.

El colegiado permite incorporar nuevos actores a la coalición. Sin embargo, persiste un núcleo duro integrado por sindicatos de trabajadores rurales y ONG que trabajan en el territorio, influidas muchas veces por la Iglesia Católica. Esta composición es similar al caso de Cerrón Grande. Como en Chalatenango, encontramos un conjunto de actores con un proyecto compartido y con relaciones de larga duración. En ambos casos, estos lazos son la base, en una etapa más avanzada, de una institucionalidad que permite a la coalición ganar espacios de influencia: el CACH en Cerrón Grande y el colegiado en Jiquiriçá. Las diferencias serían dos. Por un lado, el grado de solidez de la coalición de Jiquiriçá es menor, quizás porque sus actores no se han visto obligados a atravesar un evento traumático, como la guerra civil salvadoreña, que en Cerrón Grande contribuye a afianzar la coalición de manera decisiva mediante el surgimiento de una narrativa propia que da



sentido a sus acciones (Asensio, 2011b). La otra diferencia radica en la manera en que la coalición logra conformar una institucionalidad: mientras en Cerrón Grande se trata de una institucionalidad autogenerada, en Jiquiriçá la clave está en la intervención directa del Estado para conformar el colegiado.

La coalición del Valle de Jiquiriçá no determina la dinámica territorial, pero incide en los ritmos y en los detalles de la transformación ocurrida en los últimos años. Su importancia radica en que constituye un cambio respecto a la tradicional división del poder dentro del territorio. Históricamente el poder municipal en el Valle de Jiquiriçá estaba dominado por un pequeño número de familias propietarias de la tierra, muy poderosas e interrelacionadas entre sí, con un acceso privilegiado a las oportunidades económicas. Tras la conformación de los sindicatos de trabajadores rurales los agricultores comienzan a hacerse parte de los procesos políticos, sea a través de la formación política o de sus líderes que los representan en sus demandas. En este sentido, la coalición permite a los agricultores acceder a espacios donde antes no tenían llegada en forma individual.

Los cambios positivos se explican fundamentalmente por la existencia de mercados dinámicos y por la acción de Estado. Sin embargo, estos procesos se aceleran por la acción de la coalición, que hace posible llegada de las políticas públicas y el incremento de la inversión estatal en el territorio. Esto permite la presencia en la toma de decisiones y el aumento de la prosperidad de un gran número de pequeños y medianos agricultores familiares. Se puede decir en este sentido que el impacto del movimiento sindical en la política local y las instituciones se han reforzado mutuamente para lograr una mejora en el territorio. Como en el caso de Cerrón Grande, el principal aporte de la coalición apunta a poner temas en agenda e incrementar la capacidad de los pobladores locales para ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones. Los casos analizados a continuación también incluyen estos propósitos, aunque las estrategias son muy diferentes.

3.3. Coaliciones que combinan crecimiento e inclusión

El tercer grupo de coaliciones presente en los territorios trabajados por el programa DTR busca conjugar los dos objetivos antes mencionados: crecimiento económico y equidad. Este es el grupo más complicado de caracterizar ya que: (i) se trata de coaliciones de largo plazo, que se desarrollan a lo largo de periodos de tiempo dilatados, a veces incluso varias décadas; (ii) a diferencia de los casos anteriores, son construcciones sociales muy difusas. Agrupan a un gran número de actores y casi siempre carecen de una institucionalidad propia. Un ejemplo al respecto lo encontramos en Tungurahua, provincia del interior de la sierra de Ecuador (Ospina et al, 2011).

Tungurahua es un territorio con arreglos institucionales particulares, basados en: (i) una estructura productiva del territorio diversificada, que incluye no solo actividades primarias, destacando la dinámica del sector manufacturero local y la proliferación del sector



servicios, especialmente en algunas parroquias; (ii) una estructura agraria sin grandes propiedades (hasta fecha reciente); (iii) el buen funcionamiento de las instituciones y organizaciones locales, claves en la extensión de servicios de educación, infraestructura productiva y protección al mercado interno; (iv) un sistema de comercialización descentralizado, con un buen número de ferias de dimensión local y regional. Esta situación se debe en buena medida a la existencia de una coalición tácita, impulsada principalmente por productores rurales intermedios y comercializadores de las ferias, que en ocasiones tienen lazos entre sí, de familia o de otro tipo, a los que en las últimas décadas se suman comerciantes de mayor envergadura, fundamentales para ampliar las redes de la coalición. Se trata de una alianza de larga data, cuyos orígenes se pueden rastrear hasta mediados del siglo XIX, a la que se incorporan nuevos actores, incluso en las recientes décadas de 1990 y 2000. La característica más importante es la temprana "simbiosis" entre propietarios y comerciantes, favorecida por el hecho de que muchas familias se dedicaban tanto a la producción como a la comercialización en ferias. Los factores claves son dos: la estructura de propiedad de la tierra que permite una producción diversificada, y la existencia de una sólida red de ferias con centro en Ambato, la capital provincial, que incrementa los incentivos a la producción. Favorecido por estos hechos, además de su centralidad geográfica y buena conectividad, Ambato se transforma en un centro de acopio y comercialización que crece hasta convertirse en uno de los principales mercados a nivel nacional.

Un factor clave para el éxito de la coalición es el capital social. Según Ospina et al (2010), los lazos débiles (Granovetter, 1985) "no se establecen en la producción sino en la comercialización porque allí es donde necesitan más contactos, más apoyos mutuos y más redes, al enfrentarse a un mundo más ajeno y hostil". Esto implica que los actores centrales de la coalición no son diversos. Se trata más bien de una coalición entre actores con características similares. Aportan capitales similares, pero cuentan con una gran capacidad para generar nuevas alianzas horizontales y verticales. Establecen relaciones con una diversidad importante de actores de dentro y fuera del territorio, que a su vez establecen relaciones con representantes de prácticamente todas las regiones del Ecuador.

Dos fenómenos explican esta capacidad de negociación de los pequeños y medianos comerciantes y productores: la estructura de propiedad de la tierra y la extensión de la infraestructura de riego compartida. Al ser equitativos, ambos factores extendieron la capacidad de negociación de los pequeños y medianos productores frente a los comerciantes. Este equilibrio habría permitido que las organizaciones de productores tuvieran un papel importante en la estructuración de las reglas y leyes que regulan el sistema de mercados en Tungurahua. Un factor adicional son las intervenciones gubernamentales, sobre todo en infraestructura vial y electricidad, que benefician a la comercialización y que responden en buena parte a las demandas sociales de la coalición. Recientemente, el gobierno provincial comienza a diseñar y aplicar políticas de apoyo de a la producción para hacer más eficiente la cadena productiva. Aunque no existe evidencia suficiente que indique que esta acción ha sido producto de las demandas de la coalición, de una u otra



forma el gobierno provincial es expresión de ella y así lo hace notar, al menos a nivel discursivo.

Aunque la dinámica territorial de Tungurahua haya sido beneficiosa para un amplio grupo de pequeños y medianos productores y comerciantes, existen dos limitaciones. Por un lado, los beneficios no alcanzan a los sectores que quedan fuera del sistema de producción y comercialización organizado a partir de las ferias. En este sentido, ser parte de la coalición marca la posibilidad de estar dentro o fuera de las dinámicas virtuosas del territorio. Por otro lado, persiste una fuerte desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres. Estas últimas, a pesar de participar del mismo proceso productivo y comercial no reciben los mismos beneficios. Estas limitaciones no ponen en cuestión el éxito de la coalición, ni su aporte a un modelo de desarrollo territorial beneficioso para gran parte de los habitantes del territorio. Pero nos obliga a recordar que los objetivos de las coaliciones están en relación con sus integrantes. Las coaliciones, como señalábamos más arriba, no responden a una acción voluntarista, sino a los intereses y cálculos de los actores que las integran.

En Tungurahua encontramos un modelo de desarrollo que es resultado de procesos que se remontan a más de un siglo de antigüedad. Menos espectacular es el caso de Valle Sur-Ocongate, en la sierra de Cuzco, Perú (Asensio y Trivelli, 2011a, 2011b, 2011c). En este territorio los cambios también apuntan a un modelo de desarrollo territorial inclusivo, pero el proceso es mucho más reciente, por lo que resultados son más incipientes y tenues. Valle Sur-Ocongate comparte con Tungurahua algunas características básicas. Es una zona de alta pobreza, con una fuerte densidad cultural, una historia llena de avatares y una población mayoritariamente indígena y quechua hablante. La dinámica del territorio tiene un momento clave con la reforma agraria de los años setenta. Es entonces cuando comienza a conformarse una coalición de largo recorrido entre productores rurales medianos y pequeños (agrupados casi siempre en comunidades) y profesionales del desarrollo (que trabajan tanto en ONG como en programas públicos) que busca poner en marcha un proceso de inserción productiva. Con el tiempo esta coalición se transforma en dos sentidos: (i) cambia el perfil de los profesionales del desarrollo que la integran, que pasan a ser muchos de ellos procedentes de las propias comunidades del territorio, pero con formación urbana y experiencia profesional, y (ii) cambia el perfil de las autoridades locales, surgiendo alcaldes campesinos con una nueva agenda y un estilo diferente de hacer política, que es más sensible a las demandas de los productores rurales y de las comunidades altoandinas. Los alcaldes se convierten en una parte central de las coaliciones e impulsan nuevas alianzas con otras instituciones públicas y privadas para atraer mayores inversiones hacia el territorio.

Los resultados son un conjunto de cambios institucionales que afectan a la producción y comercialización de productos agropecuarios: ferias más accesibles, mejores condiciones de comercialización, supervisión de las transacciones para evitar el acaparamiento, fo-



mento del uso comercial del quechua, etc. (Asensio 2011c). Estos cambios se desarrollan en un contexto de mejora de las vías de comunicación y favorecen la inclusión social de los sectores campesinos que hasta ese momento tenían escasas posibilidades de acceder a los mercados urbanos de Cuzco (Asensio, 2011c). En paralelo se produce una revalorización cultural y étnica de la cultura andina. La coalición entre alcaldes y técnicos de organizaciones de desarrollo se apoya en una narrativa que resalta el pasado inca del territorio y los valores asociados a la cultura andina (Asensio y Trivelli, 2011b). La iconografía indígena se convierte en referente oficial y el quechua pasa a ser el principal idioma de la administración pública a nivel cotidiano. Este resurgimiento cuenta con el apoyo de los intelectuales cuzqueños, quienes por sus propios motivos elaboran esta narrativa en los años ochenta y noventa, en el marco de un proceso de incaización de la ciudad de Cuzco. Como en el caso de Chalatenango, es esta alianza entre actores de dentro y fuera del territorio la que permite construir el discurso legitimador y dotarlo de mayor fuerza y arraigo en el territorio.

Valle Sur-Ocongate sigue siendo en la actualidad un territorio con altos niveles de pobreza. Los cambios son más cualitativos que cuantitativos. Sin embargo, existe un ambiente general optimista. Un porcentaje muy alto de la población considera que en la actualidad viven mejor que hace 10 años. Incluso entre los sectores pobres son mayoría quienes observan una evolución positiva. Existen algunos riesgos que en el futuro pueden hacer que las cosas cambien (extensión de la ciudad de Cuzco hacia la zona rural, incremento de las diferencias internas, decadencia de Urcos, la capital del territorio) pero por el momento se puede hablar de un incipiente proceso desarrollo rural inclusivo en la línea del caso, más exitoso y consolidado, de Tungurahua.

Tungurahua y Valle Sur-Ocongate son ejemplos de coaliciones con fuerte impacto en las dinámicas territoriales. En ambos casos se trata de territorios que no cuentan con recursos naturales especialmente valiosos, con un porcentaje alto de población rural e indígena. La clave del éxito de las coaliciones es su capacidad para impulsar cambios en la producción y comercialización favorables a los pequeños y medianos productores. Estos cambios son posibles porque la coalición se inserta en los procesos de toma de decisiones dentro de los territorios. Los pobladores rurales incrementan su capacidad de agencia y se convierten en un actor decisivo en la micro política local y territorial. Sin embargo, en tanto modelo de desarrollo rural, estas coaliciones también tienen problemas importantes. Por un lado, son coaliciones poco sensibles hacia lo que podríamos llamar los "excluidos de los excluidos". En uno y otro caso los avances en equidad de género son escasos y se deben sobre todo a la inercia (la tendencia general en toda América Latina de las mujeres a participar en política y en actividades económicas) y no a acciones concretas de la coalición (Florian y Emanuelson, 2011; Florian et al, 2011).

Por otro lado, a la hora extraer enseñanzas para replicar el modelo, hay que considerar que se trata de procesos que requieren de un desarrollo temporal muy largo. Como muestra el caso de Valle Sur-Ocongate se requieren décadas para que el impacto acumulativo de los pequeños cambios en las reglas de producción y comercialización tenga un



impacto fuerte en las dinámicas territoriales. Esta prolongada etapa de maduración supone un riesgo muy alto. Los territorios no son entidades aisladas, sino que se encuentran insertos en dinámicas más amplias, nacionales y regionales. En cualquier momento un choque externo puede frustrar el proceso de desarrollo local, ya sea en forma de un conflicto social agudo (como ha ocurrido en muchos de los países del continente en las pasadas décadas), de un cambio brusco en las políticas públicas que trastoque los equilibrios de poder (reforma agraria o liberalización) o de un desastre climático. El grado en que las coaliciones sociales se encuentren efectivamente insertas en los procesos de toma de decisiones locales es clave para contrarrestar el efecto de estos choques externos al territorio. Así lo demuestra, por ejemplo, el caso de Tungurahua, cuya evolución ha sabido sortear periodos de crisis política de carácter nacional y otras turbulencias socio-políticas de envergadura.



4.- Conclusiones

Comenzamos este documento caracterizando las coaliciones territoriales transformadoras como un elemento clave para el desarrollo de círculos virtuosos de crecimiento e inclusión social. Señalábamos que las coaliciones podían ser un mecanismo para poner en marcha procesos de cambio endógeno, que permitieran a los territorios rurales escapar de la senda predeterminada por trampas de pobreza y desigualdad estructurales. A partir de aquí construimos un modelo ideal de coalición territorial transformadora, que haría posible superar los dilemas entre crecimiento, equidad e inclusión social, permitiendo el desencadenamiento de círculos virtuosos de desarrollo territorial. Este modelo ideal conscientemente se planteaba como un constructo teórico, para contrastar y analizar los casos de coaliciones realmente existentes. Unos casos que, como es obvio, muestran que la realidad siempre es más compleja que la teoría, entre otras cosas porque ni las dinámicas, ni las coaliciones territoriales, se desarrollan en un espacio vacío. Tienen lugar en y son parte de un contexto nacional y regional en constante transformación. Estas dinámicas macro y meso determinan la posibilidad y límites de las coaliciones territoriales. Partiendo de aquí, presentamos seis conclusiones de este estudio.

a.- La historia de las coaliciones territoriales no se puede contar en blanco y negro. Para comprender las dinámicas de cambio a favor de un desarrollo inclusivo es necesario incluir matices. Pocas coaliciones son exitosas siempre o son exitosas en todos sus objetivos. Lo habitual es que mezclen éxitos y fracasos, o que tengan éxitos limitados. Encontramos coaliciones que, si bien no determinan las dinámicas del territorio, sí logran cambios sustantivos en aspectos concretos de equidad, capacidad de agencia o sostenibilidad ambiental. Un elemento clave para ello es que son muy pocas las coaliciones que logran cristalizar en un proyecto territorial de largo recorrido. Esto explica también las dificultades para negociar con éxito el dilema entre crecimiento e inclusión social. Lo que encontramos son: (i) coaliciones que logran impulsar un cierto crecimiento fuerte, pero tienen impacto limitado en cuanto a inclusión social; y (ii) las que logran mejoras en términos de inclusión, pero con tasas de crecimiento y reducción de pobreza limitadas. En algunos casos existen mejoras en ambas dimensiones, pero se trata de procesos de muy largo plazo que es difícil asociar de manera unívoca a la acción de coaliciones. La particularidad de estos casos, nos lleva a relevar dos aspectos clave para la implementación de políticas, que no son fáciles de resolver: la dimensión temporal de los procesos de cambio, que trascienden los periodos de gobierno y escapan de lógicas electorales, y la densidad de las relaciones sociales y económicas de los habitantes del territorio, sus redes, liderazgos, sentidos compartidos, grado de imbricación con las autoridades políticas, entre otras variables asociadas a los procesos de articulación de actores sociales para el desarrollo.

b.- El origen de las coaliciones está relacionado con cambios en los incentivos percibidos por los actores que las integran. En este sentido encontramos coaliciones prospectivas, que surgen para generar cambios en las dinámicas territoriales a partir de lo que los actores perciben como una ventana de oportunidad, y coaliciones reactivas, que nacen co-



mo respuestas a cambios en las dinámicas que ya se han producido. En ambos casos una parte importante del esfuerzo de sus promotores consiste en hacer evidente el contexto de oportunidad. En este sentido las coaliciones estudiadas realizan una doble labor: elaboran un discurso legitimador (que evidencia los nuevos incentivos y les confiere una retórica de interés general) y construyen redes de aliados potenciales, que apoyan a la coalición, o al menos la toleran. Esta labor inicial de posicionamiento es una de las claves para la posterior capacidad de las coaliciones para promover cambios institucionales en los territorios. En el caso de las coaliciones del primer grupo (Chiloé y Ostúa-Guija) el discurso legitimador suele apuntar al crecimiento y la creación de empleo. En el segundo grupo (Cerrón Grande y Jiquiriçá) se suele enfatizar objetivos sociales y ambientales. En el tercero (Tungurahua y Valle Sur-Ocongate) se trata de una amalgama más compleja, ya que son coaliciones más difusas. Más que un discurso explícito, lo que hay es una concreción de elementos identitarios o culturales, que enfatiza la singularidad de los territorios y que puede adquirir diferentes formas según la coyuntura política (un perfil más ambiental, más económico, más cultural, más político o más étnico).

c.- La complejidad de los procesos de cambio es una constante en todos los casos incluidos en el estudio. Las coaliciones analizadas son exitosas en varios sentidos: impulsan cambios institucionales para la producción y el comercio (Chiloé, Ostúa-Guija, Valle Sur-Ocongate, Tungurahua), extienden sentidos comunes que hacen posible cambios de políticas públicas a mediano y largo plazo (Cerrón Grande, Jiquiriçá) y favorecen la focalización de políticas públicas o iniciativas privadas en los territorios rurales donde actúan (Chiloé, Jiquiriçá). Estos cambios pueden ocurrir en forma de ruptura radical, a partir de un choque interno o externo, que abre la oportunidad para cambios profundos en periodos de tiempo relativamente breves. Esto ocurre sobre todo en el caso de las coaliciones del primer grupo. Es el caso de Chiloé, primero con la introducción del salmón, y posteriormente con la incidencia masiva del virus ISA. También en Ostúa-Guija un cambio paradigmático está detrás de la coalición; la agresiva política desreguladora del gobierno guatemalteco de finales de los noventa da paso en muy pocos años a un nuevo escenario social y económico en las zonas rurales del país. Es la acción de la coalición lo que permite que el resultado sea diferente en Ostúa-Guija en comparación con otros territorios rurales.

En otros casos, los cambios son graduales, sin que se perciba de manera nítida un punto de quiebre. Mahoney y Thelen (cit. en Bebbington et al, 2012) proponen cuatro posibilidades de cambio institucional no paradigmático: (i) cambio por desplazamiento, mediante la eliminación de viejas reglas y la introducción de nuevas; (ii) cambio por superposición de capas mediante la introducción de nuevas reglas junto a las existentes; (iii) cambio por deriva, debido al impacto distinto de las reglas tradicionales como resultados de un cambio en el entorno y (iv) cambio por conversión, debido a una reorganización estratégica de las normas y su peso relativo en el conjunto del marco institucional. Las coaliciones analizadas apuntan sobre todo a cambios por superposición y deriva. Son los ca-



sos, por ejemplo, del cambio en las reglas de intercambio en Valle Sur-Ocongate o la introducción de reglamentaciones ambientalistas en Cerrón Grande. En Tungurahua, por el contrario, encontramos un cambio por conversión, explicado en buena medida por la larga duración del proceso analizado.

d.- La cuarta conclusión del estudio apunta a que es necesario problematizar la diferenciación entre cambio endógeno y cambio exógeno. Lo que encontramos en la mayoría de los casos es una interacción entre impulsos de cambio generados endógenamente e impulsos de cambio generados exógenamente. En este contexto, las coaliciones permiten, por un lado, que los impulsos de cambio externos arraiguen en un territorio y, por otro, que los impulsos surgidos dentro del territorio sean asumidos por otros actores, ganando la fuerza necesaria para concretarse. Las coaliciones más exitosas en conseguir sus objetivos son aquellas que son capaces de asumir estrategias de acción en varios niveles, es decir, aquellas que pueden plantear la disputa por sus objetivos no solo en la arena territorial, sino también en la arena nacional y eventualmente en la arena internacional. Ejemplos incluidos en este estudio son la coalición salmonera de Chiloé (para el tema crecimiento), la coalición de Cerrón Grande (para el tema ambiental) y la coalición de Tungurahua (para el tema de la comercialización). Las coaliciones que no logran este salto pueden ser exitosas a nivel territorial, pero las dinámicas que generan tienen impacto limitado o precisan de tiempo prolongado para tener un impacto profundo, como ocurre en cierta medida en Valle Sur-Ocongate.

e.- Los casos analizados muestran que un aspecto clave a la hora de definir el sentido de los procesos de transformación impulsados por las coaliciones es la capacidad de agencia de los actores que las integran, especialmente la capacidad de agencia de los actores tradicionalmente excluidos. Hay muchas definiciones del concepto "capacidad de agencia". Amartya Sen, por ejemplo, la define como aquello que la persona es libre de hacer y de lograr en busca de los objetivos y valores que considera importantes, cualquiera sean estos. Bebbington (2011), de modo semejante, define agencia como "el potencial de hacer y de ver las cosas de manera diferente". Tanaka (2012), ampliando las anteriores definiciones, señala que la capacidad de agencia es el conjunto de activos y habilidades, prácticas y simbólicas, que permiten a un actor intervenir en la definición de la agenda, la toma de decisiones y la asignación de recursos, de acuerdo a sus propios intereses, reconocidos como tales y definidos por él mismo.

Todas estas definiciones coinciden en dos elementos: la agencia implica capacidad para identificar los propios intereses y capacidad para promoverlos en la interacción social. Las coaliciones tienen una relación compleja con la capacidad de agencia de los actores. Por un lado, los casos analizados muestran que las coaliciones tienden a apostar por una agenda más inclusiva en la medida que los territorios cuentan con actores con capacidad de agencia consolidada. Un ejemplo son las coaliciones de Valle Sur-Ocongate y Cerrón Grande, que tienen como antecedente procesos de movilización social muy intensos. Por otro lado, sin embargo, las propias coaliciones pueden convertirse en catalizadores de esa capacidad de agencia, al proporcionar las posibilidades y recursos para que los actores



menos favorecidos identifiquen y defiendan sus intereses, ya sea potenciando la inserción de los grupos desfavorecidos en la toma de decisiones o incrementando su competencia práctica. Ejemplos al respecto los encontramos en Jiquiriçá y en los dos casos antes citados. Por el contrario, en Chiloé la situación es más compleja, pues se ha producido un proceso de movilización que en buena medida es en respuesta a la coalición.

En el sentido contrario, cuando los actores del territorio tienen poca capacidad de agencia, las coaliciones dominantes pueden representar intereses sectoriales poco inclusivos. Es lo que ocurre en Chiloé y Ostúa-Guija. En estos casos un factor decisivo es la existencia de actores mediadores que pueden reconducir la situación, obligando a las coaliciones dominantes a negociar determinadas prácticas, sea imponiendo límites a su actuación o negociando beneficios adicionales. En este sentido, en Chiloé existen al menos tres contrapesos importantes: una coalición alternativa que levante el tema de los dilemas ambientales de la coalición; sindicatos de trabajadores de la industria salmonera cada vez más articulados a nivel regional y nacional, e instancias del Estado central que velan por el cumplimiento de las normativas ambientales y laborales, que si bien tienen capacidad de acción limitadas contribuyen a poner los temas en agenda. Nada de esto existe en Ostúa-Guija, donde la sociedad civil y el estado central tienen capacidades extremadamente limitadas. Es esta existencia de contrapesos, más que el origen interno o externo del actor principal, lo que explica la mayor o mejor "sensibilidad" de las coaliciones frente a los problemas ambientales y las demandas de inclusión de otros actores del territorio.

f.- Finalmente, otro tema importante para el análisis del impacto de las coaliciones en los procesos de desarrollo virtuosos, es la manera en que se construye la legitimidad de las coaliciones. Entendemos por legitimidad el hecho de que los objetivos de la coalición sean aceptados como válidos por los demás actores del territorio (aunque esto no necesariamente quiere decir que los apoyen). De los casos analizados surgen dos elementos clave: (i) para que una coalición adquiera legitimidad es necesario que combine varios tipos diferentes de capital; y (ii) la importancia de que exista un discurso o relato que dé sentido a la acción de la coalición. Cuando estos elementos se combinan, existen más posibilidades de que las coaliciones tengan un alto grado de legitimidad considerada como actores válidos en la toma de decisiones dentro del territorio. Son los casos de Tunurahua, Valle Sur-Ocongate, Jiquiriçá y Cerrón Grande. Una etapa posterior, que es consecuencia y al mismo tiempo refuerza la construcción del discurso legitimador es el mayor involucramiento en la política local. Esto ocurre en Valle Sur-Ocongate y en Tunurahua, casos en los que la participación en la política local facilita (aunque no resuelve) la negociación del dilema entre crecimiento e inclusión.

Los casos analizados muestran coaliciones relativamente exitosas, pero con limitaciones que muchas veces derivan de las dificultades para enfrentar los cambios de coyuntura que ocurren a nivel macro: cambios en las tendencias económicas y de consumo, cambios en los equilibrios políticos nacionales, etc. Las coaliciones son una herramienta de



los habitantes de los territorios para negociar estos cambios, pero el éxito no siempre acompaña a su empeño. Incluso cuando existe un consenso amplio dentro del territorio, es difícil escapar de los condicionantes del contexto económico y político.

De ahí que a la hora de formular recomendaciones de política en favor de un desarrollo territorial que supere el dilema entre crecimiento y equidad, deba hacerse a una escala mayor que la territorial. Esto supone que quizás debamos pensar la idea de territorio de una manera distinta, menos focalizada en aspectos geográficos, culturales o históricos (lo que hace diferentes a los territorios) y más en la intensidad de las relaciones sociales y económicas de sus habitantes.

El estudio nos deja algunas enseñanzas de cara a los esfuerzos por construir coaliciones que permitan negociar en los territorios rurales los dilemas entre crecimiento y equidad. Los casos analizados muestran que las relaciones sociales y económicas que hacen posible la conformación de coaliciones no son improvisadas o puntuales. Son el resultado de esfuerzos de medio y largo plazo, que requieren un hilo de continuidad, que vaya más allá de las coyunturas de corto plazo, políticas o electorales. Por lo tanto, es necesario comprender que los procesos de desarrollo son procesos de largo plazo, que no siempre se ajustan a los ciclos de planificación y gestión presupuestaria. Desde la política pública se puede contribuir a potenciar estos procesos, pero sin forzar la obtención de resultados en el corto plazo.

En la misma línea, los casos analizados evidencian la necesidad de articulación de las autoridades públicas de los distintos niveles de gobierno, territoriales y nacionales. Esta no es sin embargo, una tarea sencilla. Dos puntos resaltan en este sentido. Por un lado, es importante partir de un alto grado de realismo en las intervenciones que apuntan a potenciar coaliciones en favor del desarrollo territorial. Es imprescindible considerar los intereses de los actores involucrados y aprovechar las oportunidades derivadas del despliegue de sus propias estrategias. Modular procesos que ya existen, puede ser un camino más provechoso y factible, en lugar de apostar por coaliciones "ideales" que empiecen desde cero.

Por otro lado, la articulación entre los diferentes niveles de gobierno no debe dejar de lado la importancia de considerar otros actores relevantes para la definición de las dinámicas territoriales. Son estas dinámicas las que, en última instancia, generan crecimiento económico y hacen posible plantearse objetivos de equidad. Esto significa que, en el camino de convertirse en una herramienta funcional para lograr cambios institucionales en favor de un desarrollo *www*, las coaliciones deben enfrentar muchas veces un dilema entre cohesión y capacidad de incidencia. La manera en que este dilema se resuelve es clave para su éxito o fracaso. De ahí la importancia de facilitar proceso de interlocución, que atiendan a mejorar la competencia práctica de los actores menos favorecidos y su capacidad para definir su propia agenda en contextos de negociación con otros actores más poderosos. Esta interlocución y negociación entre actores implica incluir en las coaliciones, al menos como aliados, a actores inicialmente menos sensibles hacia las agendas de



equidad, que sin embargo son imprescindibles para generar procesos www con oportunidades reales de trascender en el tiempo, o por encima de las coyunturas políticas.



Bibliografía

Acemoglu, D. y J. Robinson (2006). *The Economic Origins of Dictatorship and Democracy*. Cambridge, Cambridge University Press.

Asensio, R. H. (2011a). *Éxito y límites de una coalición de poderosos (Ostúa-Güija, Guatemala)*, documento del proyecto *Coaliciones, dinámicas territoriales y desarrollo*, Lima.

Asensio, R.H. (2011b). *Cerrón Grande (El Salvador). Cohesión, identidad e incentivos externos en una coalición de larga duración*, documento del proyecto *Coaliciones, dinámicas territoriales y desarrollo*, Lima.

Asensio, R.H. (2011c). *El mercado y más allá del mercado. La importancia de Cuzco para las nuevas dinámicas territoriales de Valle Sur-Ocongate*, documento para el proyecto *Mercados dinámicos y desarrollo territorial*, Lima.

Asensio, R. H. y C. Trivelli (2011a). *Crecimiento económico, cohesión social y trayectorias divergentes Valle Sur – Ocongate (Cuzco – Perú)*, Documento de Trabajo N° 65. Programa *Dinámicas Territoriales Rurales Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural*

Asensio, R. H. y C. Trivelli (2011b). *Puesta en valor de activos culturales y dinámicas territoriales en el sur de Cuzco. Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC)*. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago de Chile.

Asensio, R. H. y C. Trivelli (2011c). *¿El ocaso de las ciudades intermedias? Urcos y las dinámicas territoriales del sur de Cuzco*, manuscrito, Lima

Bebbington, A. (2011). *Theorizing rural territorial dynamics in Latin America: elements for a theoretical framework*, Draft

Bebbington, A., P. Hollenstein, I. Nussbaum, P. Ospina y E. Ramírez (2012). *Desarrollo territorial, ambiente y coaliciones extra – territoriales*, Documento del Programa *Dinámicas territoriales Rurales*

Berdegú, J. et al (2011). *“Determinantes de las dinámicas de desarrollo territorial rural en América Latina”*, Documento de Trabajo n° 101, Programa *Dinámicas Territoriales Rurales*, Rimisp, Santiago

Birner, R. et al (2007). *The Political Economy of Agricultural Policy Reform in India. The Case of Fertilizer Supply and Electricity Supply for Groundwater Irrigation*. New Delhi, International Food Policy Research Institute (IFPRI).

Evans, P. (1995). *Embedded autonomy: states and industrial transformation*. Princeton: Princeton University Press.



Fernández, I. y D. Miranda (2011). Coaliciones, dinámicas territoriales y desarrollo. El caso de la coalición salmonera en Chiloé Central, documento del proyecto Coaliciones, dinámicas territoriales y desarrollo, Santiago.

Florian, M. y C. Emanuelsson (2009), con A. V. Peláez Ponce y S. Paulson. Género en las dinámicas territoriales en la cuenca Ostúa-Güija, suroriente de Guatemala, Programa Dinámicas Territoriales, Documento de Trabajo nº 75, Santiago de Chile, 2009.

Florian, M. S. Paulson, I. Gómez y C. Emanuelsson (2011). Género y dinámicas territoriales rurales en la ribera norte del humedal Cerrón Grande (El Salvador), Santiago de Chile,

Fløysand, A. H. Haarstad y J. Barton (2010). Global economic imperatives, crisis generation and local spaces of engagement in the Chilean aquaculture industry, Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, vol. 64, nº4, pp. 199-210.

Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, vol. 91, 1985, pp. 481-510

Meynard, F. et. al. (2011). El rol de los sindicatos rurales en las dinámicas territoriales del Valle de Jiquiricá, documento del proyecto Coaliciones, dinámicas territoriales y desarrollo, Santiago.

Moore, B. (1973). Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia. El señor y el campesino en la formación del mundo moderno (1966). Barcelona, Ed. Península.

North, D. C. (2006). Understanding the process of economic change, Princeton economic history of the Western World, Princeton, New Jersey

Oseland, S.E., H. Haarstad y A. Fløysand (2012). Labor agency and the importance of the national scale: Emergent aquaculture unionism in Chile, Political Geography, vol. 31, pp. 94-103.

Ospina, P. (coordinador), Alvarado, M., Brborich, W., Camacho, G., Carrión, D., Chiriboga, M., Fraga, R., Hollenstein, P., Landín, R., Larrea, A., Larrea, C., Maldonado, P., Matuk, S., Santillana, A., Torres, A. (2011). "Tungurahua rural: el territorio de senderos que se bifurcan". Documento de Trabajo Nº 70. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile.

Phyne, J. (2010). A Comparative Political Economy of Rural Capitalism: Salmon Aquaculture in Norway, Chile and Ireland, Acta Sociologica, vol. 53, nº 2, pp. 160-180.



Quan, J. (2010). Territorial dynamics in Northeast Brazil: the role of social coalitions, actor networks and state policy in the Jiquiriçá Valley, Bahia. United Kingdom: DRAFT PAPER SUBMITTED TO CONFERENCE.

Quan, J., Ruiz Olalde, A., & Santos Rocha Sousa, V. (2011). Territorial Diversity and Inclusive Growth: Development Dynamics in the Jiquiriçá Valley, Northeast Brazil. Santiago, Chile: Documento de Trabajo N° 72 Programa Dinámicas Territoriales Rurales Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Ramírez, E. Modrego, F. Macé, J. C. y Yáñez, R. (2009). "Dinámicas Territoriales en Chiloé Central: La Fuerza de las Coaliciones Extra Territoriales". Documento de Trabajo N° 54. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile.

Rimisp (2008). Investigación Aplicada de Dinámicas Territoriales Rurales en América Latina: Marco Metodológico (versión 2), Documento de Trabajo N°2, Programa Dinámicas Territoriales Rurales, Rimisp, Santiago

Romero W. y P. Zapil (2009). Dinámica territorial del consumo, la pobreza y la desigualdad en Guatemala: 1998-2006, Programa Dinámicas Territoriales, Documento de Trabajo n° 51, Santiago de Chile.

Romero W., A. V. Peláez y M. Frausto (2011). La dinámica territorial en la cuenca Ostúa-Güija. Programa Dinámicas Territoriales, Documento de Trabajo n° 98, Santiago de Chile, 2011.

Silber I. C. (2004). Mothers / Fighters / Citizens: Violence and Disillusionment in Post-War El Salvador, *Gender & History*, vol. 16, n° 3, pp. 561–587.

Silber I. C. (2010). *Everyday Revolutionaries: Gender, Violence and Disillusionment in Postwar El Salvador*, Rutgers, Rutgers University Press.

Tanaka, M. (2012). En busca del eslabón perdido: coaliciones sociales y procesos políticos en el desarrollo territorial rural, documento del proyecto Coaliciones, dinámicas territoriales y desarrollo, Lima.

